

Carlos Andrés Pérez

Presidente de la República de Venezuela

La última década del siglo comienza con signos inequívocos para el optimismo democrático del mundo; sociedades que parecían hasta ayer petrificadas, que motivaban los más sombríos pesimismos, incluso respecto a las posibilidades de la paz mundial, están transitando ahora por un proceso de transformación cargado de oportunidades y potencialidades esperanzadoras, pero también acechado por las incertidumbres y amenazas que caracterizan todos los procesos de cambios sociales a gran escala.

Venezuela es un país latinoamericano que ha alcanzado prolongada trayectoria democrática. Nuestra historia es un legado de combates y sacrificios por la libertad. Desde el inicio de la lucha de independencia los ejércitos libertadores sólo recorrieron la vasta geografía continental, con el único propósito de conquistar la independencia y conformar el anhelo integrador de una gran nación latinoamericana. Nunca más soldados venezolanos se han movilizado fuera del territorio nacional para librar combates en conflicto con otra patria hermana o en función de propósitos expansionistas.

Ser sede de este Simposio sobre la Consolidación de la Democracia en América Latina, que reúne a relevantes

personalidades de nuestro Continente, es un privilegio, para mí particularmente una gran satisfacción. Al propio tiempo, una oportunidad como Presidente de la República para pronunciar palabras de apertura que puedan estimular la reflexión de ustedes sobre las inquietudes que conmueven hoy a la América Latina.

Debemos serenamente reconocer que muchas veces, cuando alguna democracia ha colapsado, las causas no han sido del todo ajenas a sus conductores: miopías, irresponsabilidades e incapacidades del liderazgo democrático, se combinaron en distinto grado para dar al traste con el mejor de los sistemas políticos. Muchas democracias sucumbieron no tanto porque alguna fuerza nacional o extranjera las interviniera, sino porque los hombres y los grupos vinculados a ella no supieron actuar adecuadamente para conservarla. Lo que quiero decir es que la responsabilidad y la capacidad del liderazgo democrático, por acción y omisión, juega un papel fundamental en los procesos de establecimiento, consolidación, preservación y desarrollo de la democracia como forma de vida.

Construir un orden democrático sobre los principios de la convivencia y la tolerancia es una tautología de la que en un tiempo no nos habíamos percatado; por no haber sabido convivir con la acción y el pensamiento pluralista en el pasado, asistimos a la quiebra de la democracia. He allí su fragilidad básica. No basta proclamar que somos demócratas; nuestra conducta cotidiana, nuestra manera de relacionarnos con la divergencia y las instituciones que construimos para tales fines, deben constituir pruebas fehacientes de la vocación proclamada.

Otra fragilidad democrática está constituida por las resistencias que oponen las instituciones que una vez cumplieron su papel, pero que hoy se presentan como

anquilosadas e incapacitadas para enfrentar los nuevos retos. Tenemos forzosamente que adaptar nuestros sistemas institucionales a los tiempos cambiantes.

Nuestros partidos políticos juegan un papel estelar como canalizadores de aspiraciones y demandas sociales y como instrumentos de integración social. Nuestras democracias, las democracias latinoamericanas de los tiempos actuales sólo pueden ser democracias de partidos; pero eso sí, de partidos renovados.

La transformación que requiere la institución partidista no es la que la despoje de su carácter de organización de masas, sino la que la vincule de manera cualitativamente distinta con la población. Los partidos no deben sustituir al pueblo, sino integrarse a él. La calidad dirigencial de los partidos no debe fundamentarse exclusivamente sobre su capacidad de control de maquinarias, que a la vez depende de su capacidad de gestionar favores ante el Estado. La relación entre dirigentes de partidos y bases populares, en función de los retos económicos, requiere de una nueva fundamentación del liderazgo. Sólo una fundamentación democrática del liderazgo partidista, volcado hacia la acción ciudadana, podrá recuperar la credibilidad resquebrajada en la democracia y en los dirigentes políticos que le sirven de soporte. Este es un problema fundamental de la gobernabilidad democrática.

Este objetivo nos propone el reto de ordenar la agenda moderna de la democracia latinoamericana. Se me ocurre que un primer punto sobresaliente, vinculado con el que vislumbro como nuestro papel en el mundo, es el de la integración latinoamericana; pues sin duda, ninguna de nuestras naciones por sí misma, o bloques parciales de ellas, podrán con la rapidez y profundidad exigidas, colocarse en situación de modernidad competitiva y hacer frente a sus adversarios.

América del Sur vive una etapa de particular trascendencia. La democratización en toda la región, la presencia de gobiernos de elección popular en sus países, es un hecho sin precedentes y circunstancia histórica propicia que sirve de marco para iniciar esta reflexión profunda sobre el futuro de nuestros pueblos.

La inesperada y amplia apertura de la Unión Soviética y todo su sistema político, incluida la Europa Oriental, en los movimientos de reforma y renovación que se concretan en los dos conceptos-clave del proceso, la Perestroika y la Glasnot, nos muestra y señala cómo vivimos un clima universal de renovación y de cambios, incluida la América Latina, que inicia también el proceso de reflexión introspectiva de los esquemas de comportamiento históricos, y ahora enfrenta su necesaria adecuación a los acontecimientos ante las crisis que afectan a la comunidad internacional.

Estos no son fenómenos del porvenir. Ya están aquí, entre nosotros. Y la disyuntiva es clara. Tenemos que ser capaces para movernos, integrarnos y manejarnos en ellos o nuestras democracias quedarán desarboladas en unas naciones sin competencia para seguir el núcleo del curso de la historia. No se trata de ser la locomotora del gran tren que se desplaza hacia el próximo siglo. Ni siquiera de ser uno de sus primeros vagones. Es más simple y llevadero el objetivo: ser un vagón en el viaje de ese tren, con identidad y vida propia. No tiene por qué desvelarnos o acongojarnos que el nuestro sea un horizonte donde no nos vamos a ver como "gran potencia". Lo que éstas han hecho, a veces y no pocas, con su poder, permite que ese no sea un destino especialmente deseable ni necesario. Nuestro rol es más sobrio y honesto. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tanto como sea posible, mediante nuestras propias fuerzas, integrándonos al mundo con una capacidad cada vez más competitiva,

no para desplazar sino para jugar un papel democratizador y de equilibrio. Nuestra meta es lograr un rol activo en el centro del mundo que se está desplegando e impedir que seamos naciones periféricas y prescindibles. Y esto no es poco.

Un cúmulo de circunstancias nos comprometen a la acción, para enfrentar tanto la crisis económica que conmueve globalmente a la región, como la que mantiene vivo el conflicto en Centroamérica, dramáticamente redimensionado ahora por el desenlace de la dictadura panameña con la intervención armada de Estados Unidos, y que imponen la revisión de las instituciones del Sistema Interamericano y los principios básicos que lo inspiraron: seguridad colectiva, soberanía, autodeterminación, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos, definitivamente vulnerados ya con la guerra de Las Malvinas.

El Sistema Interamericano fue concebido dentro de una concepción paternalista y de predominio unilateral de la gran potencia que constituyen los Estados Unidos, pese a sus definiciones de solidaridad y acción colectivas.

La solidaridad de nuestros Estados era aparentemente monolítica. Se concibieron los órganos del Sistema Interamericano sobre tal base, así como los mecanismos de resguardo. También la OEA, como expresión de la supuesta existencia de una Región. La Hemisférica. Que si bien lo es geográficamente, en cambio la realidad incontrovertible nos la presenta como dos regiones bien diferenciadas histórica, social, económica y culturalmente consideradas.

La bien recibida presencia de Canadá en el Sistema Interamericano nos ofrece una oportunidad singular para que intentemos la redefinición del Sistema y de sus objetivos, cuyo centro siga siendo la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ahora como foro en el

cual las dos regiones del Hemisferio establezcan sus acuerdos y la convivencia armónica y progresiva para el bienestar común y la acción mancomunada.

La realidad latinoamericana enfrenta otros obstáculos. Nuestros enemigos son también la deuda externa, la pobreza crítica, el narcotráfico, la depredación del ambiente. En una palabra, el subdesarrollo. Juntos debemos encontrar una respuesta adecuada que no permita a los poderes hegemónicos la aplicación de soluciones que puedan implicar una seria limitación al ejercicio de nuestra soberanía. Y desde luego el entendimiento en planos de igualdad y respeto mutuo con Estados Unidos, con prescindencia expresa y definitiva de la antihistórica relación de subordinación que aún se pretende.

Resulta imprescindible coordinar y cohesionar nuestra acción. Y para que podamos hacerlo es preciso dar validez exacta al concepto de solidaridad que ha sido en su realidad histórica vacío de contenido dinámico. Desvirtuado por la deformación y la hipertrofia de un principio básico, muy caro y vital para nuestras patrias. La no intervención. Que la traumática historia nuestra la ha deformado en la práctica como una forma pasiva de intervención. Por cuanto nuestra dejación de acciones activas de solidaridad, en defensa de principios y normas a las cuales hemos dado validez supranacional en los tratados y convenios internacionales, y en los textos constitucionales de nuestras naciones, abre de par en par las puertas de la intervención. Como ha sucedido reciente y dramáticamente en Panamá. La retórica de la protesta nos protegerá de toda responsabilidad histórica.

La crisis económica que nos agobia es la otra cara de nuestra crisis. Afecta con mayor o menor intensidad a todos los países. No hemos logrado una solidaridad activa, una posición efectiva, unida y solidaria.

La insolidaridad que inhibe la concertación para la acción mancomunada, se refugia otra vez en la retórica que si bien es precisa y contundente, no se aplica en nada práctico y nos ha llevado a aceptar condicionamientos que limitan nuestra soberanía. Los derechos y deberes económicos de los Estados, proclamados por la ONU en 1974, se han visto menospreciados. En fin, Latinoamérica se enfrenta a una nueva realidad. La crisis invade todo su quehacer.

El problema de las relaciones entre el orden económico y el orden político en América Latina debe ser efectivamente repensado, para superar las teorías simplistas que hasta hace poco predominaron y lamentablemente transmitieron un pesimismo infundado respecto de nuestras posibilidades democráticas. Afortunadamente, la convicción y la voluntad democrática, la capacidad de aprendizaje de pueblos y líderes y la decisión y capacidad de actuación lúcida, ha sido más terca que las teorías simplistas y pesimistas; hoy somos un continente democrático, venciendo presagios fatalistas y fuerzas oscurantistas.

Se sostiene que en América Latina el Estado Democrático está sobrecargado de demandas que superan y desbordan su capacidad de respuesta, esto es verdad. Pero a la vez, no es posible sofocar, escamotear o manipular las legítimas y apremiantes necesidades de nuestra mayoría de conciudadanos. Este es uno de los más graves dilemas que enfrentan los gobiernos de América Latina. Las respuestas no son fáciles. De lo que sí estamos seguros es de que con prácticas autoritarias no resolvemos el dilema. Sólo con más democracia, diálogo y concertación; sólo si queremos y sabemos jugar el juego de la controversia canalizada institucionalmente, estaremos en capacidad de enfrentar eficientemente los retos de la justicia social.

Las exigencias de la construcción económica de América Latina impone que los esfuerzos y decisiones que se adopten vayan estrechamente de la mano con una reforma del Estado y de los partidos. El Estado centralista debe descentralizarse y reducir su intervención discrecional en una sociedad cada vez más reacia a ello; no se trata de debilitar o dismantelar al Estado, sino más bien de fortalecerlo en sus funciones más urgentes, relativas a su papel regulador para garantizar la reducción de las penurias y desigualdades sociales.

La recuperación económica de América Latina está en función de su reestructuración político-democrática y no al revés. Sólo podremos enfrentar con mayor probabilidad de éxito los problemas económicos y sociales que nos aquejan, con nuevas fórmulas políticas y nuevas decisiones. Pero éstas, para ser formuladas y ejecutadas eficientemente, necesitan de un Estado diferente y de unos partidos transformados. El cambio político democrático es el pre-requisito del cambio económico. La experiencia nos ha demostrado que no siempre la democracia llega o se profundiza después del crecimiento económico. Esta es la oportunidad de demostrar que sólo en democracia y gracias a la democracia, Latinoamérica superará sus vulnerabilidades.

La democracia, que es un modo de vida y un sistema político de validez insuperable, debiera ser garantía de paz y justicia internacionales. Pero como he dicho otras veces, si bien la democracia política es el régimen mediante el cual el pueblo participa en condiciones de igualdad en la toma de decisiones públicas, la vieja verdad es que la democracia política no basta y es precaria, cuando no la acompaña la democracia social y económica. La democracia es y debe ser el fruto de la justicia social. Ese es el reto para los latinoamericanos.

Se impone entonces derrumbar viejos mitos. En el campo de lo nacional como lo acabo de señalar, al igual

que en el regional. Hemisférico. La solidaridad continental y el interamericanismo en su concepción tradicional ya no tienen cabida ni siquiera como retórica diplomática. Reitero ante ustedes lo que he dicho a los propios norteamericanos. Se hace perentorio definir las relaciones entre las dos regiones, con inconfundibles perfiles. Definición que debe servir de base y fundamento a un nuevo trato capaz de poner fin al desentendimiento histórico para abrir francos y fructíferos rumbos a la cooperación.

Profundizando en lo señalado más arriba, debemos buscar fórmulas concretas de renovación del Sistema Interamericano. La fresca presencia canadiense nos abre magnífica perspectiva. Estas fórmulas no deben restringirse a la necesaria reforma de instrumentos jurídicos, como son la Carta de la OEA, el TIAR, o el Pacto de San José de los Derechos Humanos. El problema no radica sólo en la actualización o renovación de los textos de pactos y acuerdos suscritos. Es condicionante la voluntad política hasta ahora no demostrada por nuestros gobiernos en la utilización y adecuada práctica de sus mecanismos.

Como ya lo dijimos, desde la Guerra de Las Malvinas hasta los recientes acontecimientos en Panamá, antes y después de la intervención de los Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos ha demostrado una inoperancia e irrelevancia absoluta y no precisamente porque su Carta Constitutiva no prevea los mecanismos de acción y toma de decisiones, sino por la falta de voluntad de los Estados Miembros. Cosas no muy distintas diríamos sobre la deuda externa, que concreta la crisis económica más grave que ha enfrentado América Latina y de la cual la OEA no ha querido darse por aludida.

Nuestras reflexiones conducen a una sola conclusión. Se requiere la concertación entre los factores funda-

mentales en nuestros países para que la voluntad de los gobiernos permita darle un nuevo enfoque al Sistema Interamericano, adecuado a las realidades latinoamericanas; y a los cambios trascendentales que se operan en el mundo. Debemos iniciar esta etapa de concertación para proponer respuestas comunes que lleven a América Latina a soluciones permanentes, decisorias del futuro, que por culpa nuestra se nos ofrece tan incierto.

Estamos en el momento histórico propicio para las definiciones políticas que ayuden a renovar el Sistema Interamericano.

Esta nueva visión debe evidentemente basarse en la defensa y consolidación de la democracia en todos y cada uno de nuestros países, como objetivo fundamental del Sistema. Lo que supone la adopción de mecanismos que aseguren la vigencia de garantías que protejan los derechos políticos y democráticos de los ciudadanos, que encarnan y representan la soberanía que es el fundamento básico del principio de no intervención. Cuando esos derechos ciudadanos se violan es cuando se viola la soberanía. Y salvaguardándolos colectivamente, para proteger a los pueblos de todas las formas de autoritarismo, es la tarea que le toca ahora a los países latinoamericanos. Redefinir los conceptos que han inspirado al Sistema Interamericano y rescatar la solidaridad.

En nuestro Continente hemos presenciado situaciones en las que en la lucha por el mantenimiento de la democracia se ha admitido la intervención del organismo regional. Cabe recordar la exigencia unánime del órgano de consulta de la OEA del reemplazo inmediato del régimen de Somoza y el respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua, así como la instalación en Bolivia en 1979, también por presión diplomática de los países integrantes de la OEA, de un gobierno de conciliación; decisiones és-

tas que no fueron en ningún momento cuestionadas ni violatorias de principio alguno del Derecho Internacional.

Desde esta perspectiva pido que reflexionemos y podamos proponer medidas prácticas para que el Parlamento latinoamericano sea una institución generadora de medidas democratizadoras, que sean vinculantes, en el lugar de nuestro Continente donde fuese necesario. En concordancia con ello tenemos que pensar en un mecanismo permanente y operativo que reúna a los Jefes de Estado del Continente y les permita concluir acuerdos prácticos de cooperación multilateral que den fuerza a las bases políticas, económicas y sociales de la democracia.

Debemos acordarnos de la doctrina según la cual todo país donde no se respete la legalidad democrática queda automáticamente fuera de la comunidad latinoamericana. Como corolario, todas las naciones democráticas del Continente, junto con el aislamiento del gobierno que infrinja los procedimientos y valores democráticos, formarán de inmediato una alianza para activar todos los mecanismos y acuerdos internacionales, con el fin de cooperar de manera conjunta y eficaz para que los pueblos recuperen la democracia.

Al instalar este simposio, me permito pedir a todos sus participantes el debate sobre estas ideas con las cuales se pretende el logro de un espíritu de unidad regional, el consenso en torno a los valores democráticos y la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, para que como tema de análisis y reflexión durante estos días sirva de base a la elaboración de conclusiones y propuestas concretas que conlleven a la reformulación del esquema actual. Para que estos principios básicos, irrenunciables, sobre los cuales se asientan la existencia y soberanía de nuestras naciones, no signifiquen en sí mismos una suerte de patente de corso para que actúen factores internos o externos

que violen o vulneren la base cierta de la soberanía nacional: la expresión de la voluntad popular.

Quiero concluir reiterando palabras que expresara en el Seminario sobre Democracia y Participación en Quito: El reto de América Latina es asumir la responsabilidad de poner nuestra casa en orden, promoviendo las transformaciones que demanda el reconocimiento de nuestros errores, fijando nuestra posición en el mundo y consolidando el proceso democrático en un clima de orden y responsabilidad.

Les doy la ilimitada bienvenida a nuestro país, en trance de modernizar su democracia, desde la experiencia de más de treinta años de continuidad y con los ojos muy abiertos hacia el Continente y el mundo, para aprender de todos con humildad y respeto, preservando aquello que es propio de nuestra tradición y nuestra personalidad histórica.

¡Manos a la obra!